- En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 03 días del mes de abril del año 2014, siendo la hora 17.54, en la Sala de Comisiones de la H. Legislatura, se reúne la Comisión Especial para el Estudio del Código Procesal Penal de Tucumán.

Sr. Presidente (Caponio).- Buenas tardes.

Gracias por la espera. Me disculpo nuevamente porque la tardanza en el comienzo ha sido por un imprevisto no deseado. La reunión de hoy tenía como eje principal el tema de poner al tanto a los miembros de la Comisión que no han tenido la oportunidad de viajar a la Provincia de Santa Fe de los resultados de la visita.

Realmente hemos vuelto muy impresionados y muy ilusionados con lo que hemos visto en Santa Fe. Después voy a ceder la palabra a los otros miembros de la Comisión que han estado presentes.

Lo que hemos observado realmente ha sido un proceso político que ha durado mucho tiempo, que ha empezado en 2006 y que ha concluido con la implementación del proceso en el año 2011; proceso político que comienza el Gobernador Obeid y nos explica muy bien en una reunión que hemos tenido con el Ministro de Justicia, doctor Lewis, lo termina aplicando a este plan estratégico de transformación del Poder Judicial un gobierno socialista. Se ve que han tomado la decisión política de avanzar en una transformación de todos los fueros y habían comenzado por el fuero penal.

Todas las normativas que se han aplicado y han trabajado para la modificación del sistema procesal no han sido solamente el Código de Procedimientos sino que ellos avanzan con una ley de implementación progresiva, la creación del Centro de Asistencia Judicial, leyes de transición entre el nuevo sistema y el viejo sistema, leyes de creación del Ministerio Público de la Acusación, leyes de creación del Servicio Público Provincial de la Defensa, leyes de organización de Tribunales Penales y la última norma que estaba en vigencia a partir del año 2014, una ley de herramientas donde hacen los últimos ajustes.

Cuando volvemos del viaje, esto ha sido comentado entre los miembros, veíamos con suma importancia que la tarea de esta Comisión no solamente se limite a la modificación del Código Procesal Penal sino que también era importante trabajar, creo que era eje de esta transformación, crear el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa.

Ante esta situación, que era una decisión que nosotros veíamos que tenía que realizarse pedimos una audiencia con miembros de la Corte. Nosotros habíamos tomado conocimiento de proyectos por parte de la Corte de avanzar en este sentido y los miembros que habíamos ido a la ciudad de Rosario, y lo invitamos a Francisco a que nos acompañe, le comunicamos a la Corte la necesidad de avanzar en la reforma total del sistema y no solamente en la modificación del Código Procesal Penal y la necesidad de que toda esta normativa acompañe la transformación de este proceso.

Estamos convencidos de eso. Creo que tanto la audiencia pública como el viaje a Santa Fe nos ha clarificado el proceso hacia donde tenemos que ir, verlo al proceso penal vigente como lo hemos visto en la Provincia de Santa Fe nos ha aclarado mucho la situación a todos.

En la Provincia de Santa Fe ellos mediante la Ley n° 12.912, que es la ley de implementación progresiva toman la decisión política de no implementar el código por regiones sino que hacen una implementación progresiva durante tres etapas por temas. En la primera etapa entra en vigencia en forma parcial por materia, sobre todo las salidas alternativas y crean una Dirección Provincial de Control de Asistencia Pospenitenciaria. Luego, en una segunda etapa, a partir del año 2009 crean las nuevas instituciones, este Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal Provincial. Ellos toman a la defensa penal como un servicio y organizan con autonomía y autarquía funcional un gran estudio jurídico que está al servicio de todas las personas que están detenidas. Hemos sacado fotos de todos los lugares que hemos visitado, que vamos a tratar de pasarlas para ilustrarlos, sobre todo a los que no han ido.

Hemos visto cómo es el sistema de las personas que están detenidas, dentro de las dos horas está presente el Servicio Público de la Defensa en la comisaría. Ellos dicen que han avanzado mucho en contra de los apremios. Dentro de las 24 horas está con audiencia frente al Juez de Instrucción lo que viene a ser en la Provincia de Tucumán y con una Fiscalía que trabaja a destajo para realizar las audiencias imputativas oralmente y en esa audiencia; o sea en un plazo de 24 horas. Realmente es un sistema que tiene mucha dinámica, hemos visto cómo funciona el Colegio de Fiscales, es una cuestión novedosa donde los fiscales no están agrupados por turno sino que tiene un sistema de turnos diario, donde hay un fiscal titular y un fiscal adjunto trabajando coordinadamente y están separados por áreas, una de las cuales, es un sector de Homicidios, Fiscalía de Violencia Doméstica y Cuestiones de Género, otra fiscalía que atiende los casos de NN. Realmente

la división por temática y otras fiscalías de delitos complejos y la de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.

Se puede apreciar cómo es el trabajo con expediente desinformalizado. Lo repetíamos siempre, es difícil de imaginárselo, porque desaparece el expediente; justo había una foto que nos habían mandado ellos, una fiscalía, como es la nuestra, con todos los expedientes y después, de repente, uno ve oficinas como las del banco donde no hay ningún expediente y sin embargo los fiscales trabajan perfectamente. La otra que es la Oficina de Gestión Administrativa, es la que coordina toda la tarea del Colegio de Fiscales con el Servicio Provincial de la Defensa y con el Colegio de Jueces, que realmente toda la tarea administrativa la descargan en esta oficina y tanto el fiscal como el defensor como el juez se limitan solamente a trabajar en su actividad específica, se olvidan completamente de la cédula, de la notificación, de la guarda de las pruebas, no tiene ninguna tarea administrativa a su cargo, solamente cuestiones jurídicas.

Creo que el éxito que han tenido ellos, al principio han tenido muchos inconvenientes que han ido zanjando con el tiempo, la implementación del Código de Procedimientos tienen al final una demora de dos años y en esta mora que tienen por presentaciones judiciales, por cuestiones administrativas de los mismos miembros del Poder Judicial, lleva a que todas las personas que estaban designadas para el nuevo procedimiento penal solamente se capaciten durante dos años. Y nosotros hemos notado la calidad del ejercicio de la profesión, tanto de los fiscales, como del defensor y como el juez en la audiencia que hemos estado presentes, que se trataba de un robo calificado en banda, donde se imputaban seis hechos a la persona, donde se ha resuelto prisión preventiva y nulidades en una hora y media.

Realmente, nosotros sacábamos el cálculo con Analía que este tipo de casos en la Provincia de Tucumán más de un mes y ellos en 24 horas de que las han detenido a las personas, dentro de las 24 horas que se logró la audiencia, ya estaba resuelta la prisión preventiva sobre dos hechos con plazo de 60 días, donde el Fiscal tenía que seguir produciendo pruebas para la audiencia de elevación a juicio. Ellos estimaban que ese tipo de casos en menos de un año tenían que estar resueltos, cuando nosotros – aproximadamente- nos puede llevar entre tres a cinco años un caso de esa naturaleza. Creo que el eje del sistema es la desinformalización del expediente y la capacitación de todos los actores.

Hemos vuelto con mucho entusiasmo de este viaje y creemos que es algo posible, que ha sido el *click* que hemos sentido todos los miembros de la Comisión en el sentido de que a esto en Tucumán lo podemos hacer.

Rosario es una ciudad que tiene una conflictividad delictual mucho más grande que la Provincia de Tucumán, hemos visto que la cantidad de salas de audiencias que ellos tienen en vigencia actualmente son nueve, nosotros tenemos seis. Los recursos tecnológicos que han invertido para adecuar las salas de audiencias si bien son importantes no es algo inalcanzable. Todas las resoluciones que toma el juez son orales, se entrega el acta de la celebración de la audiencia con la parte resolutive, es lo único que se les da a las partes y el CD grabado con la audiencia.

Sr. Vargas Aignasse.- ¿Cuánto es el presupuesto que tienen?

Sr. Presidente (Caponio).- Las salas de audiencias les costaron en diciembre del año pasado \$ 290.000 cada una, y la han hecho en cinco meses.

Sr. Vargas Aignasse.- ¿Qué presupuesto tiene el Poder Judicial en relación al presupuesto nuestro?

Sr. Presidente (Caponio).- Era similar al nuestro; era menor. Hemos estado en una reunión, ellos tienen un Secretario de Gobierno del Poder Judicial, que es el que administra todos los recursos y el presupuesto de ellos es menor.

Sr. González Navarro.- Me gustaría que sobre todo hablen los fiscales, los defensores y los camaristas que nos han acompañado pero también quiero dar mi opinión general.

Me parece que de lo que se trata es de un cambio de mentalidad muy fuerte, que es el tránsito a la oralidad, que significa realmente una mejora sustancial en cuanto a -como

decía el señor Presidente Caponio- celeridad en los trámites, transparencia y en cuanto a confiabilidad de la sociedad en su conjunto, que me parece que es importante.

Sr. Presidente (Caponio).- Ellos lo han logrado.

Sin duda creo que ningún sistema penal soluciona lo que se conoce como problemas de seguridad porque son cuestiones absolutamente distintas. Pero me parece que es muy importante avanzar sobre esto porque genera una seguridad jurídica muy diferente y una confianza en el ciudadano muy distinta. Pero para eso hay que prepararse, obviamente, como decía el señor Presidente Caponio que a ellos les llevó seis años de implementación...

Sr. Presidente (Caponio).- Ocho años en total.

Sr. González Navarro.- Claro, entre idas y venidas.

Pero lo fundamental -que creo que hay que destacar- es que se ha concebido como una política de Estado, por eso ha trascendido gobiernos de distintos signos políticos. Todas las leyes por las cuales se aprobaron, digamos, tanto las modificaciones al Código como las leyes de implementación y las leyes instrumentales, han sido adoptadas por unanimidad de los cuerpos.

Entonces, en ese sentido nos están dando de algún modo un ejemplo de que cuando se quiere construir algo que tiene una trascendencia en el tiempo y un diseño democrático en la Justicia, me parece que es muy valioso como ejemplo.

Me gustaría que los que hemos visto, los miembros del Poder Judicial que nos han acompañado den su apreciación concreta acerca de cómo funciona cada cosa, fundamentalmente el servicio público de defensa y las fiscalías. Hemos tenido la

oportunidad de conversar con camaristas, con jueces y con los miembros de la Corte y además -como decía el señor Presidente- con el Ministro de Justicia de la Provincia.

Sr. Presidente (Caponio).- Cuando tratamos el Reglamento y lo votamos, habíamos dicho que este Código tiene que salir con el acuerdo de todos los miembros de la Comisión, así nació una resolución del Cuerpo al tomar conocimiento de un probable proyecto y por eso habíamos pedido esa audiencia con la Corte, porque creíamos que era necesario que los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, mas los colegios de abogados participen y haya unidad en cuanto a todas las normas que haya que sancionar. Y sabemos que va a haber un debate legislativo en su momento, cuando se trate la aprobación de la norma, y ojalá sigamos el ejemplo de Santa Fe, donde toda la oposición ha votado favorablemente, que ha sido unánime y no ha habido ningún partido político que haya votado en disidencia.

Me he tomado el atrevimiento, en el día de la fecha, de invitarlos para que participen de estas reuniones a los representantes de Fuerza Republicana y Democracia Cristiana, al único que no he tenido posibilidad de hacerlo fue al Legislador Colombres Garmendia, representante del PRO y está el Legislador García, en representación del Radicalismo porque creo que es necesario que participen todos, porque es una norma donde quien se beneficia no son los actores del sistema, sino la sociedad en su conjunto. Así que ojalá logremos esa madurez y podamos obtener una norma que sea la más conveniente para la Provincia.

Sr. García Posse.- Les voy a pedir disculpas a todos los presentes porque tenemos una reunión en el Colegio y nos tenemos que retirar.

También quería decirles que es inevitable, después de hablar con ustedes, que uno no se contagie del entusiasmo que han traído de Santa Fe. En realidad, tal vez haya una segunda oportunidad para los que no hemos podido ir, pero antes de retirarnos queremos

ratificar el compromiso del Colegio, no solo con la reforma sino con la orientación que se va perfilando y que le vamos dando entre todos, y el reconocimiento a la tarea del Presidente, que creemos que está haciendo un esfuerzo muy importante para llevar esto adelante.

Les pedimos de nuevo disculpas, pero tenemos un compromiso que no lo podemos postergar.

Sr. Presidente (Caponio).- Antes que se retiren les quería informar que, si bien están conformadas las subcomisiones para la redacción, donde el doctor Caramuti estaría al frente de la que trata Plenario, el doctor Albo en Apelaciones y la doctora Adriana en Investigación Penal Preparatoria, ya queremos hacer un trabajo diario para la redacción. La doctora Castillo se va a instalar en la Legislatura a trabajar diariamente. La idea es que le vayamos dando forma, siempre tomando como eje el de la Provincia de Santa Fe, donde fuimos y volvimos convencidos, por la dimensión, complejidad y similitud de la ciudad de Rosario con la Provincia de Tucumán, que es el eje que tenemos que seguir y bienvenidos los aportes que hagan todos los miembros de la Comisión. Una vez que vayamos definiendo capítulos o etapas del proceso, la Comisión en pleno se volverá a reunir para ir debatiendo y sobre todo, que el trabajo que se vaya haciendo sea informado en forma permanente a los miembros de la Comisión. La dinámica de trabajo a partir del día lunes va a ser diaria.

Sr. Jogna Prat.- Sería oportuno si nos podrían circularizar el código de la Provincia de Santa Fe y todas las leyes que se han dictado para la implementación de este nuevo sistema, así lo podamos ver y definir en qué contribuir.

Sr. Presidente (Caponio).- Nos falta el código, tenemos todo el material y lo vamos a circularizar el día lunes.

Sr. Jogna Prat.- Con respecto al tema de la motivación, no termino de entender si es que en el momento que se dicta la sentencia, queda el CD, es la motivación del debate, pero a su vez ¿la motivación del juez se oraliza?, ¿en ese mismo momento, da los motivos y dicta la sentencia?

Sr. Presidente (Caponio).- Es un interlocutor.

Sr. Caramuti.- La decisión interlocutoria, que le llamamos nosotros ahora, habría que ver si esa terminología se va a mantener o no, es motivada verbalmente, solo que no se vuelca por escrito esa motivación, sino que queda registrada, todas las audiencias se graban y filman íntegramente. De manera que el juez, en el mismo acto de la audiencia, -puede ser inmediatamente o tomándose unos minutos para analizar la cuestión y tomar la decisión-, no solo decide sino que expresa los fundamentos. Todo eso queda registrado, tanto el desarrollo de la audiencia como los fundamentos que ahí se expresan y solamente se escrituraliza en ese momento un acta donde consta el día de la audiencia, quiénes comparecieron y la parte resolutive o dispositiva de la decisión. Y si las partes quieren recurrir tienen el soporte informático a su disposición, o lo pueden obtener a través de un pen drive para poder fundamentar a su vez su apelación y, eso, a su vez, va a ser analizado por el Tribunal de Apelación, que va a contar también con ese registro informático y con la exposición de las partes al agraviarse.

En la sentencia del juicio, obviamente, nosotros no vimos ninguna, vimos sentencias de audiencias preliminares, en este caso audiencia imputativa y prisión preventiva, en el juicio sí existe la obligación de fundamentar por escrito la sentencia, para lo cual hay un plazo, aunque ese plazo es más breve que el que tenemos en nuestro sistema, que es de 10 días hábiles, tiene la compensación, la contracara de que el juez o el tribunal está liberado de toda la carga administrativa y además, hay un sistema de organización, de gestión de audiencia, que va a hacer que ese juez o ese tribunal que debe

redactar los fundamentos escritos de la sentencia no va a participar de ninguna audiencia hasta que no venza ese plazo de fundamentación.

De manera que el requisito de fundamentación de la sentencia se cumple rigurosamente, tanto para una interlocutoria de un modo más breve y verbal, como para la sentencia de fondo.

Sra. Castillo de Ayusa.- Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de un proceso rápido y en audiencias orales, estamos pensando que nada de esto está legislado y que queda al azar. No es así, no nos vamos a encontrar con un Código de 10 o 15 artículos, para nada, hay capítulos de nuestra Ley Procesal que son fundamentales en toda ley por muy moderna que sea y a qué me estoy refiriendo. Nosotros tenemos un capítulo que habla de los actos procesales en cuanto al tiempo, modo y lugar de celebrarse. Ese capítulo sí va a ser reformado en lo que signifique cambiar lo escrito por lo oral, pero luego, en cuanto a los requisitos de forma, en cuanto a los requisitos de lugar no va a sufrir un cambio radical, de allí es que vamos a seguir legislando sobre lo que son hoy las sentencias interlocutorias, que tendrán otro nombre y la sentencia definitiva en cuanto a las exigencias de su motivación porque no nos podemos apartar tanto de la Constitución de la Provincia, como de la Constitución Nacional, que exigen que los jueces resuelvan motivadamente y que conste en su fundamento.

Quizás lo que va a cambiar sí, es que esa sentencia y sus considerandos va a estar en el acta por escrito, podrá cambiar este formato tradicional que tenemos de la sentencia y a la vez el soporte, esto será en video, será la grabación, etcétera, pero siempre el soporte que contenga el acto jurisdiccional va a estar a disposición de las partes. Esto con respecto al acto procesal y lo mismo con respecto a las partes, de igual manera a actos procesales que son estructurales del proceso, que podrá cambiar –repito- la modalidad de la celebración del acto, pero el acto debe seguir manteniéndose en la sustanciación de ese proceso.

Sr. Albo.- Quiero agregar una sola cosa: el hecho de que la audiencia sea breve y por ahí que la resolución sea verbal, en primer lugar, sí tiene un recaudo, que es una mayor agilidad y capacitación en los gestores del proceso, en el sentido de que tienen que focalizar puntualmente el objeto de la decisión o de la materia en litigio y la capacidad de alguna respuesta adecuada inmediatamente.

Pero el hecho de que sea oral, no creo que sea que trasunte en una deficiencia de fundamentación. ¿Por qué? Porque es ventajoso en haber tomado una resolución oralmente y el déficit que a veces le podemos encontrar es una resolución escrita es que lleva -quizás- más tiempo de elaboración. No necesariamente implica que una va a ser más fundada que la otra. La ventaja que presenta la oralidad es que focaliza el fundamento de la resolución en la cuestión litigiosa exclusivamente; en el hecho y en el derecho aplicable.

Todo lo que normalmente contenemos en el escrito, como la resulta y todo lo demás, no es necesario porque ya está contenido en la oralidad, en la oralización de la audiencia y ya quedó registrado en el soporte informático.

Nos tocó un juez que tenía una muy buena capacitación en dirección de audiencias y en resolución de litigiosidad oral. ¿Qué hizo el juez al momento de resolver? Dijo: *“Señor Fiscal, o sea lo que usted pide es esto: a), b) y d); y señor defensor, usted dijo a), b), c) y d), delimitó el objeto de la litis de una manera clarísima, expresa y pública y pudo contestar a) esto, a b) esto, y a c) esto”*.

Entonces, no necesariamente una resolución escrita, elaborada en más tiempo, tiene o contiene una mayor calidad en la fundamentación, más hoy en día con los medios informáticos, muchas veces las resoluciones se limitan a cortar y pegar y a la acumulación de doctrinas innecesarias o de jurisprudencia. Entonces, sin focalizar en el objeto de la

litis, en este caso -en diez minutos- el juez focalizó el objeto a decidir y lo decidió fundadamente.

Es decir, todo depende de las capacidades de los gestores del sistema para determinar o delimitar las cuestiones en litigio y darle una respuesta inmediata. Reitero: no necesariamente lo escrito y lo prolongado redundan en una mejor fundamentación.

Sr. Caramuti.- Las respuestas a los pedidos han sido fundamentadas.

Sr. Albo.- Pocas veces en una sentencia escrita se dio tanta precisión en la delimitación del objeto a decidir y en la decisión. La capacitación tiene mucho que ver.

Sr. Presidente (Caponio).- Vamos a pedir que nos envíen el *cd*, porque no pudimos abrir el que trajimos.

Sr. Vargas Aignasse.- El punto que estamos debatiendo es bueno, porque además los jueces van tener que prepararse y mucho, comprometerse con el expediente de otra manera. Esto le da una enorme calidad a la Justicia, creo que este hecho es muy bueno.

También me parece muy bueno que la doctora Analía Castillo de Ayusa esté al frente de lo que es la tarea del armado, no tenemos mucho tiempo ni la experiencia que puede tener ella.

Por tal motivo, me parece muy bueno que los doctores, en cada área, empecemos a darle forma; además tienen la experiencia y el conocimiento de estar adentro porque sin duda vamos por un buen camino.

Creo que esto no debe tener mayores diferencias políticas, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la política.

Bueno, el tema es ir sumando y dejar una inquietud que tiene que ver con el tema penitenciario, que no es menor, porque esto va a dar una agilidad importante y tenemos que estar preparados desde el Estado para sostener esa fluidez. Me parece muy importante esta reforma de ir por supuesto con los juzgados de instrucción de sentencia porque creo que además desde este lado, de la política desde esos juzgados de instrucción de sentencia sí se pueden proponer políticas en materia de seguridad que realmente ayuden a incluir, a recuperar a ese preso que sale y a cuidar que no vuelva a reincidir. En algún momento le hemos llevado al Gobernador ideas concretas y programas, pero si no tenemos juzgados de instrucción de sentencias, eso no tiene viabilidad. Así que dejo eso como una inquietud para que lo tengamos presente porque no es un tema menor.

Sr. Albo.- Tiene que ser un poco más amplio porque no sólo van a ser los juzgados de instrucción de sentencia, sino juzgados u organismos fijadores de las salidas alternativas que van a cumplir la función del control de las leyes.

Sr. Presidente (Caponio).- Doctor Albo, por favor cuente lo de la chica esa en Santa Fe.

Sr. Albo.- Me enteré de esto porque era en un subsuelo y como soy claustrofóbico no me sentía bien. Así que me fui a donde podía respirar y estaba una chica trabajando en la Defensoría y me acerqué a conversar con ella. Era una defensora adjunta, le pregunto qué tareas desempeñaba y responde. Me responde: “nosotros tenemos como un estudio jurídico, pero yo..., tenía una computadora con Excel abierto, una nomina y muchos datos en cada uno de los campos” esta persona era una defensora asignada exclusivamente a controlar las condiciones de detención de todas las personas que se encontraban en ese momento bajo la Defensoría Oficial y el cumplimiento de los plazos procesales de todas las fiscalías y de sus propios compañeros que llevaban a adelante los casos. O sea, de monitorear la actividad de los demás defensores. Ella era la responsable de que no tengan ningún vencimiento o que no se produzca ninguna afectación en plazo a ninguno de los imputados que defendían y también de visitar todos los lugares de detención y ver las

condiciones en que están. Ella no litigaba, no tenía juicios ni nada, sino que exclusivamente monitoreaba a sus compañeros y controlaba las situaciones de detención. O sea, que esa división funcional que hay en el Ministerio Público Fiscal, como en el Servicio Provincial Público de la Defensa es muy importante porque son sistemas de controles recíprocos.

Sr. Presidente (Caponio).- No sólo el juez de sentencia, sino que la defensa también.

Sr. Molina.- Quiero ampliar este tema: a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo, porque como defensor oficial ya estoy hace muchos años en el Poder Judicial. Los otros días tuve una charla cuando vino una Defensora General de la Nación y ella decía que los defensores oficiales son el último orejón del tarro, cierto es. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, en Santa Fe el Servicio Público de Defensa y el Ministerio Público de la Acusación dependían del Procurador de toda la Provincia. ¿Qué ocurre? No puede funcionar fiscales y defensores dependiendo de la misma cabeza, por eso se crea, fundamentalmente, tanto el Ministerio público de la Acusación como el Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué hace eso? Hace que un defensor, hay un defensor que se llama defensor provincial y el Ministerio de la Acusación, que se llama fiscal general, tienen un cierto poder y hay una estructura que tiene autarquía financiera, manejan toda una estructura y es el jefe el que maneja toda la estructura de la defensa. Esa defensa va a permitir que haya una igualdad de armas, cosa que actualmente no ocurre. Acá en Tucumán en la Investigación Penal Preparatoria, lamentablemente nosotros, los defensores, ante un planteo que queremos hacer el fiscal nos diga “no a lugar”, o sea hay una nulidad, el proceso no se lleva a cabo en forma rápida. Esta audiencia oral que hemos vivido realmente ha sido impresionante porque la imputación que se hace en ese mismo acto -eran 3 delitos distintos- queda en robo simple- esa persona conversaba con el defensor, como dijo recién el doctor Caponio, que va a la comisaría en el acto y toma contacto con el preso; en ese momento podría haber ocurrido que converse con el defensor y diga “señor defensor, queremos hacer ya mismo un juicio abreviado“, acá se

termina todo. Esa audiencia de imputación va a ser un legajo que es formalizado, que lo puede leer el defensor porque tiene acceso y en ese acto se termina el juicio. En mi experiencia nosotros hacemos los juicios penales abreviados y todos deben saber acá lo que es la etapa del 372, que es el momento de la prueba. O en la misma audiencia, 24 horas antes estamos haciendo juicio oral, es una vergüenza, estamos perdiendo tiempo.

Eso es lo que quería agregar.

Sr. Fara.-¿Han tenido contacto con alguien de la Defensa Privada? Si se trabaja bien con la defensa privada.

Sr. Presidente (Caponio).- Cuando estábamos con los Fiscales hemos tenido la oportunidad de conocer a unos de los abogados de “Los Monos”. Amablemente hemos empezado a hacer una serie de preguntas y también están contentos con la nueva implementación porque es otro ejercicio de la profesión completamente distinto.

La verdad es que la principal preocupación que hemos tenido y por lo que hemos preguntado sobre todo, era sobre el trato que tienen con el detenido. La policía no notifica, la que notifica es la Oficina de Gestión Administrativa. El tema es cómo llega el abogado privado a tener contacto con su cliente. Y lo que me dice el Servicio Público de la Defensa es que ellos le facilitan al detenido el contacto con el abogado particular.

Son una serie de normas en el ejercicio donde ellos facilitan y dentro de las 24 horas. O sea que es no es que está 48 horas y recién toma contacto con el abogado defensor.

Son cuestiones que a nosotros nos han preocupado, lo hemos puesto al tanto a “Pancho” en nombre del Colegio de Abogados y se ha comprometido a tener contacto con el Colegio de Abogados de Santa Fe para ver cuáles son los reclamos que están haciendo

en estos momentos a dos meses de vigencia los abogados en particular, porque nosotros también tenemos la inquietud.

Sr. Farhat.- Quería hacer un pequeño aporte y la pregunta sería: ¿cómo fue la evolución? Porque tal vez nosotros tengamos la experiencia que hemos vivido de ocho años de puesta en práctica, pero en oportunidad de haber conversado con la gente del Servicio Público de la Defensa y con el Ministerio Fiscal nos contaban que ellos fueron ajustando, porque sucedió que al principio llegaron los defensores públicos primero a tener contacto con cualquier persona que se encontraba detenida o demorada y se suscitaron algunos inconvenientes con los abogados particulares y en el diálogo abierto y superador para que este sistema pueda funcionar lo fueron resolviendo y desde ahí es que el Servicio Público de la Defensa pone en conocimiento y ellos mismos notifican al abogado y le preguntan quién es su abogado particular, lo llaman y lo que están observando -y este es un dato importante- es que los abogados privados no están queriendo participar mucha en las audiencias todavía, que hay como una reticencia. Esos son datos bastante interesantes.

Sr. Presidente (Caponio).- Lo que plantea García Posse en Audiencia con la Corte es que tenemos que avanzar mucho en la capacitación de los actores que la capacitación que se dé a los miembros del Poder Judicial sea la misma que se les dé a los abogados.

Sr. Farhat.- Sí, porque nosotros veíamos que, por ejemplo, en Concepción hay pocos defensores, en realidad hay dos y ahora está trabajando una porque la otra está de licencia. El tema es que no va a dar abasto si es que no se capacitan los defensores privados, no se va a poder.

Sr. Albo.- Hay una competencia desleal de la defensa pública respecto de la privada. En primer lugar, allá está todo informatizado, todo se hace vía e-mail, las citaciones, las comunicaciones, etcétera, y también los abogados particulares forman parte de eso en el sistema. Entonces, inmediatamente de producida la detención, si esa persona tiene un

abogado particular, le llega el e-mail o se le comunica por teléfono o inmediatamente cuando lo conocen en el Ministerio Público a la defensa; eso en primer lugar

En segundo lugar, cuando va el Defensor Oficial lo primero que le pregunta es si tiene un abogado particular, en cuyo caso lo llama, él se encarga de avisarle al abogado particular; o sea, no asume inmediatamente en desmedro del abogado particular. Y, en tercer lugar, si la persona no es pobre paga honorarios al servicio público de la defensa, que va a un fondo perteneciente al Servicio Público de la Defensa. O sea, que tampoco es que solamente la defensa es gratuita cuando la persona no tiene medios para pagar, sino que quien tenga los medios para pagar tiene la opción o prefiera generalmente a un abogado particular.

Sra. Castillo de Ayusa.- Insisto en los principios del proceso.

Ustedes saben bien que nosotros tenemos legislado como principio el abogado de confianza, el abogado particular; eso no va a cambiar aun con el nuevo Código. De manera tal que acá lo que se busca es que este imputado esté inmediatamente con su defensor. Si en el momento de su aprehensión o en su caso de la comparecencia a la audiencia no cuenta con un defensor particular, será asistido por el defensor oficial porque, desde luego, no puede estar sin defensor. Pero inmediatamente nombra su abogado particular cesa el defensor oficial, porque el principio es la actuación del defensor particular como ocurre ahora; la actuación del defensor oficial es subsidiaria a la designación del particular.

En ese sentido, creo que el ejercicio de la defensa particular no debe temer por dos razones: primero, porque así venimos trabajando y, segundo, porque desde luego la defensa oficial no va a ser suficiente en cuanto al número que vamos a tener de defensores oficiales con el número de abogados particulares.

Y, por otro lado, creo que allí ustedes, que ejercen la defensa particular, deben entrar ya en conversación con el colegio de abogados. Porque la ley n° 5480, del ejercicio de la Profesión de Abogado, prevé que se confeccione una lista de defensores particulares que están para la defensa particular. Entonces, esto también exige todo un movimiento por parte de ustedes.

Lo que sí un poco les quiero decir al resto de los miembros de la Comisión es que esta visita ha resultado satisfactoria en el sentido de que hemos podido ratificar, primero, la necesidad del cambio del sistema en la Provincia, que ha sido el punto número uno de discusión en la primera reunión; y, segundo, que esta comisión está bien orientada en cuanto a la metodología de trabajo.

En otras de las reuniones quedamos en claro en que necesitábamos trabajar sobre la norma, sobre la organización del fuero Penal y sobre la capacitación de sus operadores, tanto en lo jurisdiccional como en el Ministerio Público y en la defensa particular, incluyéndola dentro de la defensa oficial.

Entonces, creo que es bueno para la Comisión haber ratificado, que no es otra cosa que recoger las inquietudes de la primera audiencia, cuando acá se había planteado el problema del Ministerio Público en cuanto a su organización en la Provincia, y a este sistema que en este momento no es ni transparente ni rápido, que son creo yo los dos objetivos más valiosos de este sistema en cuanto a su implementación.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Sánchez.

Sr. Sánchez.- Gracias.

La organización del Ministerio Público varía sustancialmente. Se deja la organización tradicional de unidades tipo celdas, de la organización de los juzgados de Instrucción, de los viejos juzgados, por el sistema que también está previsto en el plan

piloto que ha sido implementado en Concepción, por la idea de la Fiscalía como una unidad que tiene a su vez áreas o sectores especializados para tramitar determinadas funciones. Ahí estaban organizadas, básicamente, una serie de unidades que tenían que ver con la recepción de denuncias, con la clasificación y derivación de los casos, esto estaba informatizado y permitía a su vez que luego los casos sean derivados a unidades especializadas, donde fiscales enfocaban específicamente sobre determinadas materias.

Había un área donde trabajaban en accidentes de tránsito, los delitos culposos, lesiones y homicidios culposos; en otra sección se había organizado un equipo de trabajo para homicidios, tomando en cuenta que en la ciudad de Rosario uno de los delitos que mayor problemas les significa es la tasa de homicidios que existe, que es bastante alta; había una organización de fiscales para tratar los temas de delitos económicos y delitos complejos, dentro de los cuales quedaban comprendidos delitos contra la Administración Pública; había otra área en la que trabajaban delitos contra la integridad sexual. La característica de este sistema es que es flexible. Estas organizaciones especializadas que se prevén dentro de la estructura de la fiscalía, no necesariamente se aplican de la misma manera en las otras fiscalías regionales a lo largo de la Provincia, atendiendo al tipo de criminalidad local o regional, donde cada fiscalía decide cómo organiza y estructura estas unidades funcionales de trabajo.

En Rosario, por la cantidad de población y el tipo de criminalidad, se hace necesario contar con este tipo de organización. Pero en las otras regiones de la Provincia se puede simplificar esa organización, e incluso se pueden llegar a unir dos equipos de trabajos de fiscales que están previstas en forma separada en Rosario, se lo puede simplificar y unir; primero, por cuestiones de personal con el que se cuenta y, segundo, por el número de delitos que hay al respecto.

La característica del sistema, básicamente, es que es flexible en cuanto a la organización interna de las unidades especializadas de fiscales; eso lo decide como parte

de la política criminal que propone el fiscal regional en su plan de política criminal al momento que es seleccionado como fiscal regional; dura seis años a cargo de la gestión de esa Fiscalía y a los seis años se produce la renovación de esa designación. Y la forma de ser seleccionado es por un plan de política criminal en el que propone una forma de organización de la Fiscalía para enfocarse en el trabajo que demanda el tipo de criminalidad local; es una forma de respuesta directa al tipo de criminalidad de la región.

Eso es importante, con lo cual es una forma de responder a esta cuestión de la inseguridad, no se trata de tener unidades de fiscales trabajando en delitos que no tienen mayor incidencia en la criminalidad general, sino que se trata específicamente de generar unidades de fiscales para trabajar con los delitos que más interesan. Obviamente, que están previstas unidades de fiscales que trabajan con las salidas alternativas y hay unidades a su vez, unidades administrativas, que le dan soporte al trabajo de los fiscales y que hacen un trabajo de control y seguimiento de las medidas alternativas, de la misma manera que lo hace la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a las Penas de Prisión que se llama OMA, y que es una oficina que trabaja al igual que la OGA, dando soporte al trabajo de los jueces.

Los fiscales tiene una estructura administrativa de soporte que cumple esa función a los fines de la información que los fiscales requieren cuando van a ir a las audiencias y también tienen el soporte para llevar a cabo las notificaciones a las personas que desean entrevistar como posibles testigos o para remitir o librar comunicaciones u oficios, o comunicaciones electrónicas a las instituciones a las que les van a solicitar algún tipo de aporte que les va a servir luego como prueba en el juicio.

Sr. Fara.- ¿Qué capacitación de trabajo tiene la Policía en este tema?

Sr. Sánchez.- La Policía ha recibido capacitación. En este momento estaban capacitando un cuerpo especial de la Policía para darles las características de investigadores al estilo

del FBI, no sé si lo han comentado ellos, pero me he podido anotar que ellos han tenido un convenio con el FBI para llevar investigadores a la Provincia, expertos, obviamente que son capacitadores en investigación para generar un cuerpo especial de investigadores que iba a trabajar directamente con el cuerpo de fiscales. No está creada una Policía Judicial, están trabajando con la estructura policial tal cual como está, solo que iban a especializar a un grupo de la Policía provincial para cumplir esta función de investigadores a cargo, funcionalmente, no escalafonaria ni estructuralmente de los fiscales, sino funcionalmente dependiendo de los fiscales.

Hay algo que no se trató o no averiguamos nosotros en la Fiscalía, pero que sí está previsto, y es que en la Fiscalía, en el plan piloto, estaba prevista la figura del investigador de la Fiscalía. Es algo que no vi en Rosario que esté previsto, pero en realidad tiene que ver con el trabajo que llevan a cabo uno o dos empleados, que se especializan en la recolección de información, que específicamente el fiscal le encomienda, no tiene que ver con el investigador policial ni tiene que ver con el instructor que actualmente existe, es una figura intermedia, que también tiene que ser capacitado especialmente para eso.

Sra. Castillo de Ayusa.- Creo que el Fiscal puede tener dos o tres asistentes.

Sr. Sánchez.- Así estaba previsto en el plan piloto, que un grupo de empleados, con algún tipo de experiencia especial y alguna capacitación extra que pudiera darse a su vez, cumplan esta función de investigadores, que son los que van recopilando la información dentro del caso y dentro de cada carpeta o legajo judicial.

Para mí lo interesante del tema -como lo dijera en la audiencia con la Corte-, era una cuestión de escala, lo que más nos preocupaba, si el sistema que habíamos visto en provincias que tenían una pequeña población o una pequeña tasa de delincuencia podía trasladarse a una provincia como esta, con la población y con la criminalidad que tenemos

en esta Provincia. Y en Rosario era la mejor forma de medirla, Rosario supera ampliamente la tasa de criminalidad y tiene prácticamente la misma población que toda la Provincia de Tucumán, me refiero a Rosario y las ciudades que integran la circunscripción judicial. Y la verdad que los resultados que se han visto son muy alentadores, muy positivos y, básicamente, las características del sistema se repiten en todas las circunscripciones. Hay matices, hay formas, hay modos, es cierto que a ellos les ha llevado 8 años llevar a cabo este proceso de implementación, pero ahí hay que reconocer que los santafecinos están pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial, están saltando directamente ya a un sistema –prácticamente- de tercera generación, porque también están previendo la posibilidad del juicio por jurado.

Sr. Presidente (Caponio).- Ellos lo han legislado, pero no lo han implementado.

Sr. Sánchez.- En cambio nosotros tenemos la experiencia de más de 20 años con un sistema acusatorio, formal, es cierto, pero con la experiencia de fiscales investigando, con una relación de fiscalías hacia policías ya establecida, cosa que no tienen los de Santa Fe, por lo cual podemos confiar que algunos pasos, que a ellos les va a tomar un tiempo lograr concretar en la práctica, nosotros lo vamos a superar más rápidamente, la experiencia nuestra es a favor en ese sentido.

Sr. Farhat.- También me preguntaba el doctor Angel Fara, qué pasaba con todas las causas que se estaban tramitando, creo que es algo importante también contarle a los legisladores y a quienes no pudieron asistir, todo el proceso de transición, de cómo se previó que tanto empleados, jueces y secretarios hagan una opción para mantenerse en el viejo sistema y quienes hacían la opción de pasar al nuevo sistema, se podían incorporar a todo lo que dio movimiento el 10 de febrero con este nuevo código en Santa Fe, previendo todo un sistema de conclusión de causas que iban a seguir en la órbita del sistema anterior que tenían ellos en vigencia. Esto es importante, porque no tan solo fue de expediente, sino también de personal del Poder Judicial, porque bien lo remarcaba la

doctora Ayusa, que es un cambio de paradigma y de cultura, en donde el funcionario que se sentía más a gusto con el nuevo sistema o con el anterior y podía elegir la opción.

Sr. Sánchez.- Un dato importante es que el nuevo sistema arranca con carga de trabajo cero, carga cero; todo lo que es viejo sistema y sistema residual queda a cargo de un grupo de magistrados, de fiscales y defensores que trabajan exclusivamente con el sistema residual hasta su conclusión; existe todo un sistema conclusivo previsto, hay plazos y hay controles periódicos sobre la conclusión de esas causas, como así también la posibilidad de aplicar algunas salidas alternativas para ir simplificando el procesamiento de esos casos.

El sistema nuevo arranca con carga cero, porque justamente uno de los objetivos del nuevo sistema es combatir el colapso que tiene el sistema por la sobrecarga. Entonces, no podríamos arrancar bien un sistema si arrancamos con la sobrecarga de arrastra.

Es decir, se arranca con carga cero y todo el sistema viejo -el expediente escrito- continúa con el sistema de gestión tradicional, habilitándose algunas medidas de salidas alternativas o algunas soluciones que permitan descongestionar más rápidamente el procesamiento de esos casos evitando en la mayor manera posible la prescripción de esos casos o que queden sin algún tipo de solución. No se trata de abandonar los casos hasta que finalmente prescriban, sino de buscarles soluciones a estos casos que deben ser resueltos y deben ir a juicio, obviamente que se cumple con esos procesos: juicio, juicio abreviado, *probation* y también se incluye las salidas alternativas.

En esos casos debemos procesar la mayor cantidad de casos para obtener la solución que sea posible en los mismos.

Sr. Presidente (Caponio).- Realmente, este era el objetivo de esta reunión, digamos, informarles a los miembros de la Comisión, que no habían tenido la posibilidad de

concurrir a Santa Fe, de qué se trataba y de comenzar desde la semana que viene, desde el día lunes, el trabajo de las subcomisiones. O sea aquellas personas que habían decidido cuáles son las subcomisiones que iban a integrar, deben ponerse en contacto directamente con los doctores Caramuti, Albo y Molina; y la coordinación de toda la redacción la va a llevar a cabo la doctora Analía Castillo de Ayusa, que va a estar presente todos los días en la Legislatura.

Sr. Albo.- No se trata solamente de modificar el Código, sino modificar el sistema, cuáles son las leyes que han dictado ellos, complementarias al Código que son absolutamente necesarias para modificarlo al sistema.

Sr. Presidente (Caponio).- El Gobernador de la Provincia de Santa Fe toma la decisión política, y al año y medio de esa decisión dicta la ley n° 12.734, que es el nuevo Código Procesal de la Provincia de Santa Fe; ellos avanzaron con la reforma total del Código. Esto fue en el año 2007.

En el año 2008 se establece una ley de implementación progresiva del nuevo sistema de Justicia Penal en la Provincia de Santa Fe, mediante ley n° 12.921. Después, mediante ley n° 13.004 del año 2009, al año siguiente, dicta una ley de transición junto con la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación y la ley de creación del Sistema del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Ese mismo año, mediante ley n° 13.018 del año 2009, dicta una ley de Organización de Tribunales Penales y Oficina de Gestión Judicial. Luego, en el año 2014, en febrero, que es la última ley que ellos dictan, es la ley de herramientas para la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, que mediante la ley n° 13.405 del año 2014.

O sea, en un plazo de ocho años han dictado siete normas que han modificado todo el sistema; es el convencimiento que nosotros hemos traído de allá. Es decir, aparte de este trabajo, es necesario el trabajo de la comisión para encaminarnos en esta normativa conjuntamente para ganar tiempo en la implementación del nuevo sistema.

Y lo que realmente va a llevar mucha inversión y mucha dedicación va a ser el tema de la capacitación, eso es fundamental. Estamos bien encaminados, hemos comparado los convenios que había celebrado la Provincia de Santa Fe y son convenios que la Corte ha celebrado, que es uno con el CEJA y con el Inecip, que son convenios vigentes. Es decir, estamos por el buen camino.

Creo que el tema de las nuevas leyes va a ser un trabajo conjunto que debemos hacerlo con la Corte Suprema de Justicia para implementar el Servicio Público de la Defensa y el Ministerio de la Acusación, es lo que voy a plantear y bueno, si Dios quiere vamos a trabajar con los relatores conjuntamente en esta normativa.

Bueno, damos por finalizada esta nueva reunión y desde el día lunes vamos a estar en contacto permanente...

Sr. García.- Perdón, antes que termine la reunión lo que se plantea, independientemente de avanzar en lo que debería ser el trabajo del nuevo sistema, también se está planeando abreviar los años que le ha llevado a Santa Fe. O sea, se desarrollaría en la legislación que ellos han desarrollado durante ocho años.

Sr. Presidente (Caponio).- Son cuestiones que se han ido planteando durante estos 6 meses de la comisión y durante las audiencias públicas. Había un convencimiento de la comisión que el Ministerio de la Acusación y de la Defensa se tenían que dividir, eso era una convicción que nosotros lo tenemos que adoptar internamente.

Cuando vamos a la Provincia de Santa Fe vemos que uno de los escollos que ellos han tenido ha sido que han dictado el Código, han reformado el Código y constitucionalmente estaban organizados como nosotros. El Ministerio Público tenía tanto la Acusación como la Defensa y posteriormente a los tres años del dictado del Código nuevo dividen el Ministerio de la Acusación del Servicio Público de la Defensa. Nosotros hemos tomado contacto y hemos tenido conocimiento que en la Corte están trabajando en este sentido. En lugar que la Corte independientemente avance, les hemos ido a plantear que se trabaje conjuntamente con esta comisión para que avancemos en este sentido. Es necesario separar el Ministerio de la Acusación del Ministerio de la Defensa.

Después las otras normas que van a ser necesarias es el tema del sistema de conclusión de causa para que empiece de carga cero va a ser mediante ley. Todos los juicios viejos van a seguir con la tramitación del procedimiento anterior y las nuevas causas empiezan con otro procedimiento. Así que es necesaria otra normativa.

Sr. García.- La pregunta concreta es: si en la misma orientación del nuevo sistema vamos a avanzar en la legislación comparada...

Sr. Presidente (Caponio).- Esa es la idea.

Sr. García.- ...para llegar a una conclusión general de todo.

Sr. Presidente (Caponio).- Exacto, es para que logremos reformar todo el sistema, no solamente el Código de Procedimiento.

Sr. García.- Está bien, recordemos que empezamos en la primera reunión de esta comisión del proyecto piloto, de ver si podía ser parcial.

Sr. Presidente (Caponio).- Nosotros hemos comenzado con la idea, la decisión política la ha tomado la Corte de avanzar en una modificación solamente en una etapa del procedimiento que es la investigación penal preparatoria. Ese era el plan piloto, solamente modificaba la investigación penal preparatoria.

Cuando comenzamos con la tarea de la comisión, la primera resolución que toma esta comisión en conjunto ha sido: “tenemos que modificar el Código Procesal completo, en su totalidad”. Cuando volvemos de Santa Fe nos damos cuenta que además de la modificación en su totalidad del Código de Procedimientos hay una serie de normas que son necesarias para que el sistema en su totalidad sea reformado.

Sr. García.- Estoy totalmente de acuerdo, pero hoy me viene a la memoria, esta mañana, en la reunión de Asuntos Constitucionales hablábamos con el legislador Páez que hay legislación que se puede ir avanzando sin necesidad de llegar a la conclusión de lo que va a ser el nuevo sistema. O sea, en eso, invito a los legisladores del oficialismo a que reflexionen porque acá no hay dudas que quienes estamos en la oposición vamos a avanzar y a estar de acuerdo cuando logremos encontrar los consensos necesarios para avanzar en un nuevo sistema, sobre todo cuando tiene dos ejes centrales como es la transparencia y la rapidez; así que en ese sentido por el lado nuestro no hay objeciones. Lo que a mí me hace mucho ruido es la decisión y voluntad política de quienes hoy gobiernan circunstancialmente la Provincia de avanzar en esta reforma porque tenemos para ir abordando leyes que las puede ir tratando esta Cámara para ver si realmente el espíritu del oficialismo va a ser adecuarse a esta nueva legislación, no que nos quedemos con una visita que han tenido compañeros de la comisión que es muy auspiciosa y entusiasta porque han podido comprobar cómo está operando hoy este sistema, sino que realmente podamos avanzar en hechos concretos que demuestran que no es solo buenas intenciones y la búsqueda de algo superador sino que también ahora todavía tenemos tiempo, porque no nos olvidemos que se viene el Mundial de Fútbol y después ya entramos en un proceso electoral adonde todos saben muy bien que el Poder Legislativo,

que está con una representación política de todas las fuerzas que así lo integran, sin duda entramos ya en un proceso preelectoral que hasta puede retroceder o demorar lo que puede ser la sanción de un nuevo sistema. La verdad que me preocupa y me interesa muchísimo que podamos ir produciendo normas...

Sr. Albo.- El éxito que se ha visto en Santa Fe es que ha trasuntado que no es la obra de un gobierno, ni siquiera de un partido, es la obra de tres gobiernos sucesivos de los cuales ha habido dos partidos gobernantes a los que se han sumado todas las fuerzas políticas.

Por eso no voy a entrar en especulaciones sobre cuál es el momento oportuno, si en esta circunstancia o no, por lo menos a los operadores de la Justicia nos interesa convocar la participación y la sumatoria de todas las voluntades políticas, oposición, oficialismo, y no solo de este gobierno, porque obviamente en el tiempo que nos queda del período gubernamental tampoco va a estar en vigencia. En realidad, este va a ser un trabajo hecho para que sea ejecutado por el próximo gobierno. Por eso lo importante de que todos los representantes del partido gobernante y todos los demás se sumen a este proyecto que es un cambio de sistema y que no va a ser solo un trabajo de este gobierno, considero que va a ser ejecutado por el gobierno que viene. Espero que sea por el gobierno que viene y no que nos lleve siete años u ocho años lo que significaría que vengan dos períodos gubernamentales más. Entonces..

Sr. García.- No estoy sectorizando, estoy diciendo simplemente que...

Sr. Presidente (Caponio).- Toda la normativa es necesario que se la trate en conjunto porque tiene que tener organicidad, tiene que tener igualdad de criterio, tiene que tener una correlación entre ellos para que el sistema funcione, por eso de nada sirve que nosotros avancemos en la División del Ministerio Público de la Defensa y de la Acusación si no tenemos delineado el esquema sobre el que vamos a trabajar. Y las normas no son más que estas, ya la teníamos definida con el trabajo que se ha venido desarrollando en la Comisión y la teníamos en la cabeza. Ahora, lo que hemos tenido la posibilidad de verla en Santa Fe, claramente y específicamente a la norma.

Sr. Sánchez.- La enseñanza que nos deja la experiencia vivida en Santa Fe fue cuando ellos hicieron el código y creyeron que esta era la solución, justo un mes antes de largar se dieron cuenta que faltaban algunos ajustes para que cierre el sistema. Esa es la idea que nos obliga a trabajar en conjunto en un paquete de leyes porque esto es un sistema, si tocamos el Código, tenemos necesariamente que tocar la organización del Ministerio,

porque las normas condicionan la estructura que terminan condicionando mutuamente las leyes.

Sr. Páez.- Hay varios proyectos de policía judicial y quizás algunos aspectos de la policía judicial podríamos tratarlo nosotros. Yo tengo un proyecto, hay dos o tres, en una de esas implementarlo antes en algunos aspectos.

Sr. Presidente (Caponio).- De nada sirve solamente la Policía Judicial si no avanzamos en las funciones del Colegio de Fiscales. Es una cuestión que está toda ligada.

Sr. Albo.- El tema de la Policía Judicial va a ser importante en la medida que se establezca quiénes tienen la conducción de la investigación. Entonces, va a ser absolutamente necesario vincular el proyecto de Policía Judicial con el proyecto de implementación...

Sr. Presidente (Caponio).- Todo el Código Procesal tiene que estar vinculado.

Sr. Faiad.- Con el doctor Fara no hemos podido ir, nos hubiera gustado ir a Rosario, pero tenía un debate oral por un delito de usurpación que tiene una pena máxima de tres años. Hace cinco años que andamos con ese juicio y no podemos tener reintegro provisorio de la propiedad y creo que con este planteo de la casación puede prescribir la acción porque han hecho un pedido de suspensión del juicio a prueba donde no han ofrecido la entrega del inmueble. Mi cliente -en el tema tan en boga de las usurpaciones- no puede recuperar la propiedad, el imputado sigue usufructuando el inmueble, es un caso que ya va para cinco años. El caso del doctor también ha venido postergando ya porque si no fijaron esa fecha, venimos con una subrogancia, el caso del doctor también lleva cinco años por un robo agravado. Se hacen eternos los juicios.

Sr. Presidente (Caponio).- Los que hemos charlado con los miembros, sobre todo es posible, más allá del trabajo que vayamos realizando, organizar el viaje a Chile. Chile es la madre del sistema. Ojalá tengamos los tiempos y lo podamos hacer. Cada vez que uno hace este tipo de visitas vuelve con problemas resueltos. Creo que las comisiones van por buen camino.

Sra. Castillo de Ayusa.- Lo que quiero decir es que sin lugar a dudas todo lo que ustedes puedan acercarme y aportar bienvenido sea. Siempre se dice que uno piensa bien, dos piensan mejor y tres mucho más.

Sr. Presidente (Caponio).- La tarea es porque usted es la que más conoce en los procedimientos.

La consulta la vamos a ir difundiendo, a medida que vayamos avanzando vamos a difundir a los miembros de la Comisión para que haya un acuerdo. Siempre teniendo en cuenta el plazo que establece el legislador García, antes del Mundial porque después empieza otra etapa política.

Muchas gracias.

- Es la hora 19.08.